

Tras la batalla campal desatada...

¿Y ahora que será del gas?

El pésimo manejo del negocio gasífero fue la tumba de Sanchez de Lozada. La información oculta y la excesiva confianza en la debilidad de las organizaciones sociales pusieron fin al mandato del presidente. Hoy, es posible que se reviertan dichas condiciones. En este artículo se presentan tres posibles escenarios que podría transitar el país en relación al energético. De las mejores decisiones que asuman los involucrados depende que se siga el más adecuado.

Por: Roberto Fernández
Especialista en Economía Política

El miércoles 8 de octubre, día en que se inició la huelga general indefinida de la ciudad de El Alto, la consigna de mayor fuerza era la recuperación del gas para los bolivianos. Pocos especulaban ese día que el movimiento que empezaron los alteños podía costarle el cargo al Presidente. El gobierno actuó con una lectura particular de los acontecimientos: El movimiento era puntual y no gozaba del apoyo del MAS ni de la COB, todo era cuestión de tiempo, el asunto se enfriaría y volvería a la calma, momento propicio para negociar. Sin embargo, tras la terrible represión desatada, con el ya conocido saldo de muertos y heridos, la ciudadanía se volcó contra el primer mandatario. La consigna cambió y se fusionó en un sonoro: "Que renuncie el Goni".

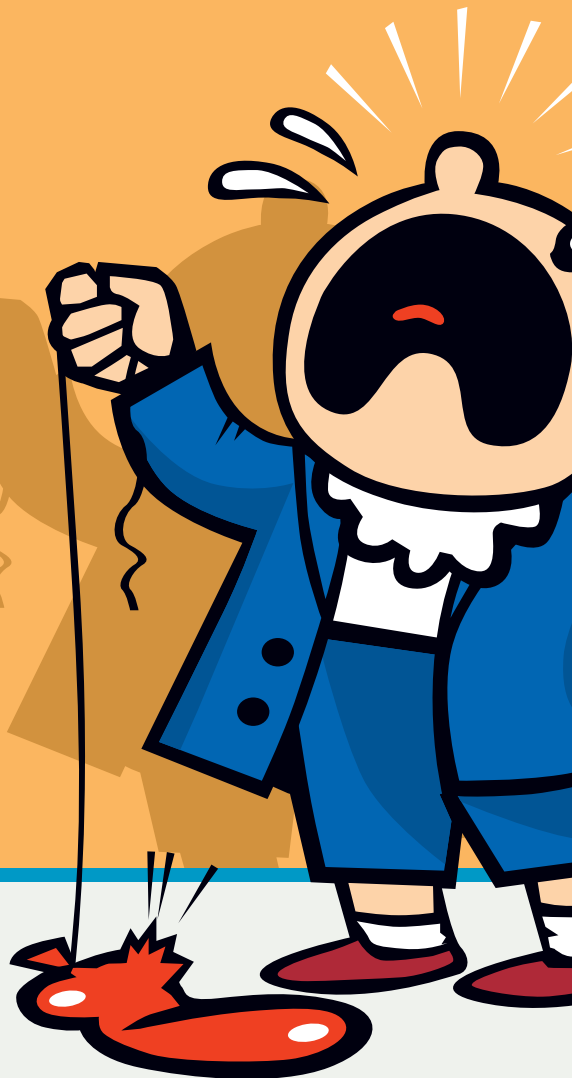
Para las transnacionales este cambio de objetivo debió ser motivo de un fuerte suspiro. El mástil de ataque ya no se dirigía hacia ellas sino contra el gobierno. La transición presidencial ha permitido que se gane tiempo y se acumulen fuerzas para un conflicto que puede, fácilmente, alcanzar mayores proporciones que las vistas hasta la fecha. El gas, está todavía en la mesa del debate y no parece sencilla su solución.

Al respecto, dadas las condiciones actuales, se vislumbran tres escenarios con cuatro actores: Las transnacionales, el gobierno, los habitantes

de occidente y la población de Tarija.

La guerra civil

El primer escenario es el de la agudización de la confrontación. Este puede darse si se radicalizan las posiciones. Pacific LNG es un monopolio (aunque hasta ahora parece que a nadie le interesa el asunto y no hacen el esfuerzo por entender la integración vertical y las formas de ocultar ganancias). Se resalta esto porque los monopolios tienen formas particulares de actuar. Como obtienen beneficios más allá de lo que en una situación de competencia lograrían, los cuidan incluso acudiendo a medios no convencionales. Corrompen al extremo a gobiernos, y dado que las cartas que tenían en la administración Sanchez de Lozada han desaparecido, es altamente probable que ahora apuesten al pueblo tarijeño. 11% del total vendido es lo que recibirá el departamento, que bien negociado puede convertirse en 20%. Pero, no sólo eso: el monopolio puede armar a la población. En Bolivia, podría ocurrir lo que en Irak. Originalmente Kuwait era parte de esa nación. Sin embargo, cuando se notó cierta animadversión hacia las transnacionales que operaban en la región más rica en petróleo. Se comenzó a impulsar a los separatistas que al fin lograron su propósito. En 1991, al mando del



depuesto Saddam Hussein, se intentó recuperar la provincia rebelde. El alto mando norteamericano señaló que eso era una afrenta hacia la libertad de los individuos y la democracia y dispuso la intervención militar para restaurar la "independencia soberana" del pueblo kuwaiti.

A que se presente esta situación colabora mucho la posición fundamentalista de varios grupos del occidente, para quienes el gas debe ser nacionalizado y sólo exportado con valor agregado (industrializado) y en su defecto quedarse bajo tierra durmiendo el sueño de los justos. Cuando existen posiciones extremas sobre un mismo tema sólo la violencia puede resolverlos y sería el camino a emprenderse. Grupos afines a Felipe Quispe verían con muy buenos ojos la guerra civil, que fácilmente puede llevar a realizar el sueño de la construcción de un país étnicamente aymará, aunque eso signifique que Tarija y Santa Cruz armen otra nación.

Este será el escenario de un gobierno políticamente débil y sin la menor idea de cómo



Un conjunto de medidas bien implantadas podrían llevar a un buen desenlace el conflicto del gas.

El requisito sería que todos los participantes abandonen las posiciones fundamentalistas y estén dispuestos a ceder. El gobierno podría llevar adelante el referéndum después de una extensiva campaña de información que sería promovida por las mismas organizaciones que liderizaron la derrota de Sanchez de Lozada.

resolver la crisis económica. Las presiones de todos los sectores sociales tienen que, forzosamente, entrar en el presupuesto general de la nación. Un mayor déficit fiscal unido a la negativa de los organismos internacionales para colaborar en su financiamiento contribuirían al recorte de gastos sociales, despido de empleados y recorte de la inversión pública, con lo que la crisis se ahondaría. Ciertamente, no aparecería la inflación pero la descomposición social sería terrible. En un cuadro así al gobierno también le convendría la guerra, permitiría solucionar el problema del desempleo al mandar al frente a los desocupados y el “estado de sitio de guerra” le permitiría arrestar a la oposición.

Al final se tendría un aparato productivo en ruinas, dos naciones que se mirarían frente a frente, dispuestas a atacarse en cualquier momento. Pacific LNG exportando libremente el gas por puertos chilenos y con las regalías e impuestos aceptados por la nueva nación.

La nacionalización

El segundo escenario es una re-edición de la experiencia de la nacionalización de la Gulf, en el año 1969. Las organizaciones de occidente demostrarían, una vez más, la fuerza que poseen. El Alto y La Paz se paralizarían en una huelga que exigiría la renuncia del presidente y la

instauración de un nuevo gobierno de transición que tenga como dos únicas tareas la derogación de la ley de hidrocarburos y la convocatoria a nuevas elecciones. El gobierno no tendría más opción que renunciar o reprimir la protesta, con una nueva cosecha de muertos. Dado que se conoce la respuesta de Carlos Mesa a la última alternativa, un nuevo gobierno se instauraría para llevar adelante la nacionalización.

En Tarija, las organizaciones de base derribarían a sus dirigencias y comprenderían que sobre los intereses departamentales están los nacionales. El pueblo del Chaco sostendría que en su territorio se encuentra el gas y por ende estarían a favor de la nacionalización.

Pacific LNG protestaría por el irrespeto a los acuerdos internacionales y demandaría una millonaria indemnización (más de \$us 3,000 millones). Las inversiones extranjeras levantarían vuelo y se declararía al país no apto para invertir. El monopolio LNG se encargaría de cerrar todas y cada una de las puertas de los organismos internacionales de financiamiento y el negocio de exportación de gas se archivaría indefinidamente. Al interior del país se iniciarían tímidos proyectos de industrialización y conexión domiciliaria. Al no contar con fuentes de financiamiento ni el Estado ni el sector privado podrían generar empleos, la crisis se ahondaría y el movimiento social se dispersaría al no contar con una demanda que los una. Como en el 70 se crearían las condiciones para una nueva dictadura auspiciada por los norteamericanos y dispuesta a reemprender el proyecto.

El escenario optimista

Un conjunto de medidas bien implantadas podrían llevar a un buen desenlace el conflicto del gas. El requisito sería que todos los participantes abandonen las posiciones fundamentalistas y estén dispuestos a ceder. El gobierno podría llevar adelante el referéndum después de una extensiva campaña de información que sería promovida por las mismas

organizaciones que liderizaron la derrota de Sanchez de Lozada. En dicha campaña se explicaría con precisión de cirujano los posibles alcances de la industrialización y la exportación del energético. El gobierno lograría que en occidente se entienda que el gas es de los bolivianos a más de 20,000 metros bajo tierra pero que para extraerlo es necesario capital y tecnología que actualmente no dispone Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Por lo tanto, entre las transnacionales y el Estado boliviano debe establecerse un acuerdo que beneficie a ambos actores. Asimismo el Estado reglamentaría el mercado de hidrocarburos, prohibiendo que una sola empresa controle toda la cadena. Lograría, además, que YPFB se introduzca en el negocio del transporte (que es dónde están las verdaderas ganancias).

Se acordaría que el gas si se exporta pero el proyecto vendría unido a alternativas de industrialización que podrían emprenderse en puertos chilenos bajo el mecanismo de zona franca. Así desde las plantas de licuefacción partirían grandes cantidades de diesel, abonos químicos y otros productos que generarían una gran absorción de mano de obra de ambos países, que marcaría el inicio de la cooperación entre Bolivia y Chile.

Las transnacionales entenderían que nada garantiza una situación de confrontación y que es necesario modificar la ley de hidrocarburos para que el pueblo boliviano reciba una mayor parte de los frutos del negocio. Las regalías e impuestos subirían consensuadamente. De la misma manera, comprenderían que las mejores empresas son aquellas que modifican para bien su entorno: construirían escuelas, caminos, fundaciones para la investigación, etc.

Bolivia le mostraría al mundo que las instituciones que ha construido son fuertes, porque la democracia es un valor que los ciudadanos han asumido como una de las cosas que más deben cuidar. Se mandaría un mensaje al mundo de que el país está dispuesto a que venga el capital extranjero, siempre y cuando respete los puntos de vista del país para que se puedan obtener beneficios mutuos.

La cruzada del presidente Mesa de liquidar la “partidocracia” tendría efectos de larga duración. Los ciudadanos ya no verían al Estado como una forma de enriquecimiento ilícito, sino como el lugar donde desempeñan sus funciones los hombres más probos.

¿Cuál camino decidiremos seguir los bolivianos? ■